Asunto C-290/22**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

3 de mayo de 2022

Órgano jurisdiccional remitente:

Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Portugal)

Fecha de la resolución de remisión:

23 de marzo de 2022

Parte recurrente:

NOS, SGPS, S.A.

Parte recurrida:

Autoridade Tributária e Aduaneira (Administración Tributaria y Aduanera, Portugal)

Objeto del procedimiento principal

El procedimiento principal tiene por objeto un recurso para la unificación de doctrina en relación con una cuestión fundamental de Derecho que, según NOS, SGPS, S.A. (en lo sucesivo, «NOS»), se resolvió en sentido contrario en dos resoluciones del Centro de Arbitragem Administrativa (en lo sucesivo, «CAAD»). El CAAD declaró, el 5 de septiembre de 2020, que una sociedad de cartera puede estar exenta del impuesto sobre actos jurídicos documentados correspondiente a los contratos de financiación celebrados con entidades bancarias. En el presente asunto, en el que NOS impugnó el hecho de que tales entidades le hubieran repercutido el valor del impuesto sobre actos jurídicos documentados, el CAAD, el 20 de septiembre de 2020, resolvió en sentido contrario, declarando que las sociedades de cartera no están exentas del pago de dicho impuesto en esas situaciones.

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

La cuestión que se plantea en el presente asunto es si la exención prevista en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Código do Imposto do Selo (Código del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), se aplica a una sociedad de cartera en una posición de prestataria/deudora de intereses o comisiones en una operación con una entidad de crédito (ambas, sociedad de cartera y entidad de crédito, domiciliadas en la Unión Europea). La solución del litigio sometido al órgano jurisdiccional remitente no solo requiere la interpretación de normas nacionales, en el presente asunto el citado artículo, sino también y especialmente la interpretación de disposiciones de Derecho de la Unión, a las que este órgano jurisdiccional se remite expresamente.

Cuestión prejudicial

¿Está comprendida en el concepto de «entidad financiera», en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 22 de la Directiva 2013/36/UE y del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento UE n.º 575/2013, una sociedad de cartera domiciliada en Portugal, regulada por lo dispuesto en el Decreto-ley n.º 495/88, de 30 de diciembre, que tiene por único objeto la gestión de participaciones sociales de otras sociedades que no operan en el sector de los seguros?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338): artículo 3, apartado 1, punto 22.

Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1): artículo 4, apartado 1, puntos 3 y 26.

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Ley n.º 150/99, de 11 de septiembre, en la versión vigente tras la reforma del impuesto sobre el patrimonio operada por el Decreto-ley n.º 287/2003, de 12 de noviembre, y sus posteriores modificaciones [(*Diário da República* n.º 213/1999, Série I-A de 11 de septiembre de 1999): artículo 7, apartado 1, letra e)].

«Artículo 7 Otras exenciones

1. Quedan también exentos del impuesto:

[...]

e) Los intereses y comisiones cobrados, las garantías prestadas y la utilización del crédito concedido por entidades de crédito, sociedades financieras y entidades financieras a sociedades de capital riesgo, así como a sociedades o entidades cuya forma y objeto se ajusten a los tipos de entidades de crédito, sociedades financieras y entidades financieras previstos en la legislación comunitaria, tanto unas como otras domiciliadas en los Estados miembros de la Unión Europea o en otro Estado, con excepción de las domiciliadas en territorios con un régimen fiscal privilegiado, que se definirá mediante decreto del Ministerio de Hacienda.»

Decreto-ley n.º 495/88, de 30 de diciembre, que regula el régimen jurídico de las sociedades gestoras de participações sociais (SGPS) [sociedades de cartera], con sus posteriores modificaciones (*Diário da República* n.º 301/1988, 6.º Suplemento, Série I de 30 de diciembre de 1988).

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 NOS es una sociedad de cartera domiciliada en Portugal, es decir, una sociedad de cartera prevista y regulada en el Decreto-ley n.º 495/88, de 30 de diciembre, con sus posteriores modificaciones, que ejerce una actividad económica de forma únicamente indirecta, mediante la gestión de participaciones sociales, en sus sociedades participadas. NOS desempeña el papel de intermediario en el circuito financiero, e incumbe a su consejo de administración la celebración de contratos de financiación y de préstamo, incluyendo los contratos a medio y largo plazo, internos y externos.
- 2 En el marco de las actividades que desarrolla, recurre a la financiación que ofrecen las entidades de crédito domiciliadas en Portugal, o que estas colocan a inversores (papel comercial y obligaciones).
- 3 En los respectivos contratos de financiación celebrados con dichas entidades de crédito, estas liquidaron y entregaron al Estado el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en calidad de sujetos pasivos, y repercutieron a NOS los costes correspondientes (comisiones por los servicios prestados): en el período comprendido entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, le repercutieron un importe de 164 936,75 euros.
- 4 NOS solicitó una revisión de oficio, que fue denegada, y que es objeto del procedimiento principal sustanciado ante el CAAD. Este, mediante resolución de 6 de enero de 2021, declaró que la sociedad de cartera no es una entidad financiera a efectos de la aplicación de la exención prevista en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Código del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, contrariamente a lo que declaró en un procedimiento anterior sobre la misma cuestión.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

- 5 Según NOS, ante una misma cuestión fundamental de Derecho y en un marco legislativo idéntico, se dictaron resoluciones opuestas, lo que justifica que se interponga un recurso para la unificación de doctrina.
- 6 La cuestión consiste en decidir cómo debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra e), del Código del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en lo que respecta a su elemento subjetivo, es decir, en qué términos debe definirse el concepto de entidad financiera establecido por el legislador nacional como requisito de aplicación de la exención prevista en la norma. Las partes discrepan en cuanto a la posibilidad de que las sociedades de carteras estén incluidas en el concepto de entidad financiera o al tipo y forma de entidad financiera a que se refiere el legislador nacional en dicha disposición.
- 7 Según NOS, remitiéndose expresamente a la resolución en que fundamenta su recurso, tanto el artículo 3, apartado 1, punto 22, de la Directiva 2013/36/UE como el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 le reconocen tal condición.
- 8 En opinión de la Autoridad Tributaria y Aduanera, como se desprende de la resolución recurrida, no cabe reconocer a NOS tal condición, dado que, en virtud del artículo 2-A del Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Régimen General de las Entidades de Crédito y Sociedades Financieras), que transpone al Derecho interno dicha Directiva, solo están comprendidas en dicho concepto las sociedades de cartera sujetas a la supervisión del Banco de Portugal.

Breve exposición de la motivación de la petición de decisión prejudicial

- 9 Se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide qué cabe entender por «sociedades o entidades cuya forma y objeto se ajusten a los tipos de [...] entidades financieras previstos en la legislación comunitaria». Y si las sociedades de cartera, constituidas con arreglo al Decreto-ley n.º 495/88, de 30 de diciembre, que tienen por único objeto contractual la gestión de participaciones sociales de otras sociedades como forma indirecta de ejercicio de actividades económicas, se incluyen en el concepto de entidad financiera previsto en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.